

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

Índice AI: EUR 49/021/2004 (Público)

Servicio de Noticias: 261/04

20 de octubre de 2004

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR490212004>

Bielorrusia: No puede acallarse a la oposición

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO

Amnistía Internacional y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)

Las autoridades bielorrusas han violado una vez más el derecho a la protesta pacífica de los detractores políticos y los activistas de derechos humanos, según han manifestado Amnistía Internacional y la FIDH entre los informes de detenciones arbitrarias y malos tratos de manifestantes. Durante los últimos dos días, centenares de personas se han manifestado en el centro de Minsk contra los resultados de las elecciones parlamentarias y del controvertido referéndum que ha eliminado las restricciones a un nuevo mandato del presidente Lukashenko.

"Esta última demostración de fuerza por parte de las autoridades bielorrusas muestra el elevado precio que deben pagar quienes se oponen al presidente Lukashenko en el país hoy día", han manifestado Amnistía Internacional y la FIDH.

La policía antidisturbios utilizó porras para dispersar a los centenares de manifestantes pacíficos que marchaban hacia el palacio presidencial empuñando pancartas con lemas como "No a la tiranía". Unos 50 manifestantes fueron introducidos a la fuerza en autobuses. Entre quienes fueron detenidos y golpeados había jóvenes activistas y destacados miembros de la oposición. Según los informes, la policía también golpeó a periodistas de los canales rusos de televisión Ren TV y NTV y detuvo a un periodista de AFP.

Algunos activistas menores de edad fueron liberados a lo largo de la noche. Actualmente se está procesando a 40 personas en el tribunal de distrito de Leninsky, en Minsk. Se las acusa, en virtud del Código de Infracciones Administrativas, de participar en manifestaciones públicas no autorizadas u organizarlas, y se enfrentan a penas de hasta 15 días de prisión o una multa.

Entre los manifestantes detenidos se encuentran Pavel Severinets, del Frente Juvenil, y Anatoly Lebedko, dirigente del Partido Civil Unido. Anatoly Lebedko sufrió lesiones graves, y está hospitalizado con conmoción cerebral, fractura de costillas y posible daño renal. Hasta el momento se ha condenado a Mykola Statkevich, del Partido Democrático Social Bielorruso, a 10 días de detención administrativa. Artur Finkevich, otro miembro del Frente Maladi, ha sido condenado a 15 días de detención administrativa, y unos miembros del movimiento juvenil de oposición ZUBR han sido condenados a entre 5 y 10 días de detención administrativa. Otros manifestantes han sido multados.

"Se trata de una clara violación del derecho a la libertad de expresión y reunión. Estas personas se encuentran recluidas por expresar pacíficamente sus opiniones. Amnistía

Internacional y la FIDH consideran a todos los detenidos presos de conciencia, y piden a las autoridades bielorrusas que los pongan en libertad de forma inmediata e incondicional", han manifestado las dos organizaciones.

Como es probable que continúen las manifestaciones, Amnistía Internacional y la FIDH piden a las autoridades bielorrusas que, en su trato a los manifestantes, respeten el derecho a la libertad de expresión y reunión, y también las normas internacionales.

Información complementaria

Las protestas se iniciaron después de que las autoridades bielorrusas anunciaron que en el referéndum celebrado el 17 de octubre más del 77 por ciento de los votantes habían respaldado al presidente Lukashenko, que ocupa el poder desde 1994, para que se presentara a un tercer mandato consecutivo. Los observadores independientes, incluidos los de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), han declarado que tanto las elecciones como el referéndum incumplieron las normas democráticas.

Bielorrusia ha sido objeto de críticas constantes de las organizaciones intergubernamentales a causa de su flagrante violación de las normas internacionales. En abril de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU criticó al país por los constantes informes sobre detenciones arbitrarias y por el acoso contra organizaciones no gubernamentales, partidos políticos de oposición y personas dedicadas a actividades democráticas. La Comisión ha pedido a Bielorrusia que conforme las acciones de su policía y sus fuerzas de seguridad a las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En mayo de 2004, el Consejo de Europa denegó una solicitud de Bielorrusia para que se renovara su estado especial en la organización, suspendido cuando el presidente Lukashenko disolvió el Parlamento en 1997.